

13 de Octubre 2020 al 16 Octubre 2020
Subdirección de Defensa Judicial y Prevención
del Daño Antijurídico

Reiteran el ámbito de competencia de la Nación sobre uso del subsuelo

(Corte Constitucional, Comunicado Sentencia SU-411, 09/17/2020)

A través de reciente sentencia, la Corte Constitucional reiteró el ámbito de competencia de la Nación sobre uso del subsuelo y su convergencia con las competencias de las entidades territoriales en la administración del suelo, que lleva implícita la aplicación de los principios de coordinación y concurrencia. La Corte hizo un llamado a las respectivas autoridades para que, en lo sucesivo y dentro de sus competencias constitucionales y legales, abran adecuados espacios de participación ciudadana para la realización de los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad con las entidades territoriales en la definición y determinación de las áreas donde se vayan a desarrollar actividades de exploración y explotación de hidrocarburos (M. P. Alberto Rojas).

Así se debe allegar un título valor dentro de una demanda presentada como mensajes de datos

(Tribunales, Auto, 10/02/2020)

Inicialmente, la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá precisó que, desde la vigencia del Código General del Proceso, las actuaciones judiciales pueden realizarse a través de mensajes de datos según el inciso 2 del artículo 103, lo cual fue reiterado por el artículo 2 del Decreto Legislativo 806 del 2020. En tal sentido, ninguna restricción puede fijarse, por vía de interpretación judicial, para impedir que las partes utilicen medios tecnológicos en todos sus actos procesales. La Corporación también indicó que el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) es un deber de quienes intervienen en un proceso judicial, según el Decreto 806, y es de mayor importancia para las autoridades judiciales, por cuanto tienen el compromiso constitucional y legal de facilitar el acceso de los usuarios de la administración de justicia (Artículo 229 de la Constitución Política). Así las cosas, no es aceptable que interpretaciones ancladas en situaciones de normalidad, las cuales fueron alteradas por la pandemia que originó el aislamiento obligatorio (hoy selectivo), se impida el ejercicio de los derechos reconocidos en la ley sustancial. Por ello, los jueces no pueden adoptar posturas restrictivas sobre normas que autorizan adelantar todas las actuaciones judiciales a través de mensajes de datos (M. P. Marco Antonio Álvarez Gómez).

Recuerdan las dos dimensiones del defecto fáctico, según la Sección Tercera

(Consejo de Estado Sección Tercera, Sentencia 11001031500020200073100 (AC), 04/25/2020)

La Corte Constitucional recordó que el defecto fáctico es un error relacionado con asuntos probatorios y, además, reconoce que tiene dos dimensiones: una dimensión negativa y una positiva. La dimensión negativa se produce por omisiones del juez, como (i) por ignorar o no valorar, injustificadamente, una realidad probatoria determinante en el desenlace del proceso; (ii) por decidir sin el apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión o (iii) por no decretar pruebas de oficio en los procedimientos en que el juez está legal y constitucionalmente obligado a hacerlo. La dimensión positiva, por su parte, tiene lugar por actuaciones positivas del juez en la que se incurre, ya sea (iv) por valorar y decidir con fundamento en pruebas ilícitas, si estas resultan determinantes en el sentido de la decisión o (v) por decidir con medios de prueba que, por disposición legal, no conducen a demostrar el hecho en que se basa la providencia (C. P. María Adriana Marín).

¿Cómo se controlan los actos expedidos durante el desarrollo de concurso de méritos?

(Consejo de Estado Sección Segunda, Sentencia 25000234200020170131701 (513019), 03/03/2020)

Acorde con su jurisprudencia, la Sección Segunda del Consejo de Estado enfatizó que en aquellos casos en que se llevan a cabo las etapas de un concurso de méritos los actos resultantes del mismo no pueden ser controlados a través del medio de control de nulidad electoral. Por el contrario, el medio adecuado para controlarlos es la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, en la medida que jurídicamente son actos administrativos laborales que reconocen una prerrogativa a quien obtuvo la mayor calificación. Según lo precedente y el caso concreto, sobre el acto de nombramiento de un procurador judicial en concurso de méritos, esto es, el Decreto 3264 del 2016, procede el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Lo anterior toda vez que no es un acto de elección de la administración, sino la consolidación de un derecho en cabeza de aquella persona que cumplió los requisitos y obtuvo el puntaje establecido para poder ocupar la vacante, a través del concurso de méritos correspondiente (C. P. Sandra Lisset Ibarra Vélez).

13 de Octubre 2020 al 16 Octubre 2020
Subdirección de Defensa Judicial y Prevención
del Daño Antijurídico

Se vulnera el derecho a la salud cuando se niega un servicio médico solo bajo este argumento

(Consejo Superior de la Judicatura, Sentencia 25000110200020200032601 (1758239), 07/29/2020)

El Consejo Superior de la Judicatura, en un fallo de tutela, recordó que se vulnera el derecho a la salud cuando se niega un servicio médico solo bajo el argumento de que lo prescribió un médico externo, a pesar de que (i) existe un concepto de un médico particular; (ii) es un profesional reconocido en el sistema de salud y (iii) la entidad tiene conocimiento de dicho concepto y no lo desvirtúa con razones científicas. Aterrice esta tesis jurisprudencial con la resolución del caso concreto objeto de estudio (M. P. Julia Garzón).

Los ajustes de la Corte al régimen de inhabilidades para condenados por delitos sexuales contra menores

(Corte Constitucional, Comunicado Sentencia C-407, 09/16/2020)

La Corte Constitucional, estudiando la Ley 1918 del 2018, determinó que la pena accesoria que se impone a los condenados por la comisión de delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales de personas menores de edad para desempeñar determinados cargos, oficios o profesiones debe sujetarse a los límites temporales que para dichas penas establece el Código Penal. Así mismo, declaró inconstitucional la facultad conferida al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para regular esta materia (M. P. José Fernando Reyes Cuartas).

Coronavirus (covid-19)

Medidas sobre inversión y enajenación de participación accionaria del Estado son inconstitucionales

(Corte Constitucional, Comunicado Sentencia C-416, 09/23/2020)

El Decreto 811 del 2020, que estableció medidas relacionadas con la inversión y la enajenación de la participación accionaria del Estado, en el marco del estado de emergencia económica, social y ecológica, fue declarado inexecutable por la Corte Constitucional. A su juicio, estas medidas adoptadas no están directa ni específicamente encaminadas a conjurar las causas que dieron origen a la declaratoria de la emergencia o a impedir la extensión o agravación de sus efectos. Por el contrario, el alto tribunal reafirmó que la enajenación de empresas estatales o de la participación accionaria del estado requiere de un debate democrático, el cual solo puede concretarse en el Congreso de la República, a través de una ley ordinaria como lo es la Ley 80 de 1993 o la Ley 226 de 1995. En tal sentido indicó que el Ejecutivo no puede auto habilitarse de manera general a través de un decreto legislativo para dar cumplimiento al artículo 150 numeral 9 de la Carta Política. Además, el efecto útil de esa disposición supone la actuación del legislador ordinario y no se agota en la exigencia de una mera reserva de ley para la autorización general de este tipo de actos. La magistrada Gloria Stella Ortiz Delgado se apartó de la decisión, sus homólogos Cristina Pardo Schlesinger, Richard Ramírez Grisales y Luis Javier Moreno Ortiz salvaron su voto y el magistrado Alejandro Linares Cantillo aclaró el suyo (M. P. José Fernando Reyes Cuartas).

Plan de Desarrollo de Duque es constitucional, excepto expresión una derogatoria

(Corte Constitucional, Comunicado Sentencia C-415, 09/23/2020)

La Corte Constitucional declaró executable el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 (Ley 1955 del 2019), ante el cargo de supuesta violación del principio de publicidad. Así mismo, declaró la constitucionalidad de los artículos 152 (Recursos del Fontic para inspección, vigilancia y control); 309 (acceso a las TIC y despliegue de la infraestructura); 310 (expansión de las telecomunicaciones) parcial y 311 (contraprestaciones a cargo de los operadores postales) de la Ley 1955. Sumado a ello declaró inexecutable la expresión “el artículo 110 de la Ley 1943 de 2018”, incluida en las derogatorias (artículo 336). La Corporación encontró inconstitucional esta derogatoria, relacionada con el equipo conjunto de auditoría para evaluar los beneficios tributarios, por vulneración de la unidad de materia. Igualmente indicó, entre otras cosas, que se cumplió satisfactoriamente con los principios de consecutividad e identidad flexible en relación con el artículo 336 (parcial). La magistrada Diana Fajardo Rivera aclaró su voto y sus homólogos Richard Ramírez Grisales, Alejandro Linares Cantillo, Antonio José Lizarazo Ocampo y Cristina Pardo Schlesinger se reservaron la posibilidad de presentar aclaraciones (M. P. José Fernando Reyes Cuartas).

13 de Octubre 2020 al 16 Octubre 2020
Subdirección de Defensa Judicial y Prevención
del Daño Antijurídico

¿Liquidador puede disponer directamente sobre posesión material de inmuebles en cabeza de terceros?

(Consejo de Estado Sección Primera, Sentencia 25000232400020080015301, 04/23/2020)

Al resolver varios recursos de apelación, la Sección Primera del Consejo de Estado afirmó que le corresponde al liquidador responder por la guarda y administración de los bienes y haberes que se encuentren en cabeza de la entidad en liquidación, esto es, velar por el cuidado, custodia y protección de los mismos. Sin embargo, para el cumplimiento de estos deberes, el liquidador tiene que ejercer, en los casos en que sea pertinente, las acciones judiciales y administrativas requeridas para el efecto ante las autoridades competentes. Pero no puede disponer de manera directa sobre la toma de posesión material de los inmuebles cuya tenencia se encuentre en cabeza de terceras personas, aunque sean de su propiedad. Lo anterior toda vez que es evidente que tal actitud supone desconocer el derecho que reclama el tercero a no ser afectado y que supone en consecuencia la presencia de un conflicto que, en todo caso, debe ser resuelto por un tercero imparcial, atendiendo la distribución de funciones y competencias entre las distintas ramas del poder público. Conozca el caso concreto en el texto adjunto (C. P. Oswaldo Giraldo López).

Recuerdan la misión constitucional y social de la Sala Disciplinaria

(Consejo Superior de la Judicatura, Sentencia 68001110200020160092601, 07/23/2020)

El Consejo Superior de la Judicatura reiteró que por mandato de la Constitución la Sala Disciplinaria tiene como objetivo primordial vigilar la conducta profesional de los abogados y defender los intereses de la colectividad y de los particulares, mediante el ejercicio responsable, serio, honesto, cuidadoso y diligente de la profesión. Esa misión, dice el fallo, se concreta en la observancia de los deberes que atañen al ejercicio de la abogacía como garantía de que efectivamente los profesionales del Derecho conserven la dignidad y el decoro profesional; colaboren lealmente en la recta y cumplida administración de justicia; observen mesura, seriedad y respeto con los funcionarios y con todas las personas que intervengan en los asuntos de su profesión; obren con absoluta lealtad y honradez con sus clientes y colegas; guarden el secreto profesional y, finalmente, atiendan con celosa diligencia sus encargos profesionales (M. P. Carlos Mario Cano).

Non bis in ídem se vulnera al imputan simultáneamente dos circunstancias de agravación sobre misma situación fáctica

(Corte Suprema de Justicia Sala Penal, Sentencia SP-31412020 (54108), 08/19/2020)

El non bis in ídem como principio y garantía constituye un derecho fundamental, a través del cual se impone como mandato una única persecución y se prohíbe investigar, juzgar y condenar más de una vez por la misma conducta delictiva, circunstancia delictual o postdelictual o hecho que incida en la responsabilidad o la pena, según el caso, precisó la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Igualmente, indicó que esta restricción es sustancial, por ejemplo, al existir duplicidad de responsabilidad o de sanción, pero también es de carácter procesal, pues dos procesos no pueden tener un mismo objeto o idéntica conducta o circunstancia modificadora de la tipicidad o de la sanción. Además, agregó que la prohibición no se hace extensiva en el caso del concurso de delitos, ni de procedimientos de conocimiento de diferentes autoridades. Por el contrario, este evento se presenta cuando el mismo hecho genera acciones penales, disciplinarias o fiscales y estos procedimientos tienen objeto, finalidad y sanción diferente a la acción penal (M. P. Eugenio Fernández Carlier).

Condicionan decreto que adoptó medidas tecnológicas para agilizar procesos judiciales y flexibilizar atención a usuarios

(Corte Constitucional, Comunicado Sentencia C-420, 09/24/2020)

Por medio de un comunicado de sentencia, la Corte Constitucional informó varias determinaciones dadas sobre el Decreto 806 del 2020, que adoptó medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del estado de emergencia económica, social y ecológica. Inicialmente condicionó el artículo 6, que alude a la demanda, en el entendido de que en el evento en que el demandante desconozca la dirección electrónica de los peritos, testigos o cualquier tercero que deba ser citado al proceso podrá indicarlo así en la demanda sin que ello implique su inadmisión. También declaró el condicionamiento del inciso 3º del artículo 8, que precisa las notificaciones personales y el parágrafo del artículo 9, relacionado con la notificación por estado y traslados, bajo el entendido de que el término allí dispuesto (2 días) empezará a contarse cuando el iniciador recepcione acuse de recibo o se pueda por otro medio constatar el acceso del destinatario al mensaje de datos (M. P. Richard Ramírez Grisales).

13 de Octubre 2020 al 16 Octubre 2020
Subdirección de Defensa Judicial y Prevención
del Daño Antijurídico

Lo que debe saber del error jurisdiccional en materia de acción de reparación directa

(Consejo de Estado Sección Tercera, Sentencia 25000233600020180045901 (63541), 09/30/2020)

El error jurisdiccional, explica una sentencia reciente del Consejo de Estado, no corresponde a una simple equivocación o desacierto derivado de la libre interpretación jurídica, sino que debe enmarcarse en “una actuación subjetiva, caprichosa, arbitraria y flagrantemente violatoria del debido proceso”. De ahí que, agrega la Sala, para la procedencia de la reparación derivada del error jurisdiccional es preciso que: (i) el afectado hubiere interpuesto los recursos de ley y (ii) que la providencia contentiva de error esté en firme. Los “recursos de ley” deben entenderse como los recursos ordinarios de impugnación de providencias, que pueden interponerse sin sujeción a las rígidas causales que operan para los extraordinarios y que no requieren de la presentación de una demanda adicional (M. P. Guillermo Sánchez).

Suspenden a litigante por efectuar afirmaciones inexactas en una demanda reivindicatoria

(Consejo Superior de la Judicatura, Sentencia 50001110200020160088301, 02/10/2020)

La Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura confirmó la sentencia por medio de la cual se suspende dos meses del ejercicio profesional a un litigante por la comisión de la falta descrita en el numeral 10 del artículo 33 de la Ley 1123 del 2007. Este tipo disciplinario se configura cuando se efectúan afirmaciones o negaciones maliciosas, citas inexactas, inexistentes o descontextualizadas que puedan desviar el recto criterio de los funcionarios, empleados o auxiliares de la justicia encargados de definir una cuestión judicial o administrativa. Según reseña el proceso, el disciplinado violó el ordenamiento disciplinario, al efectuar afirmaciones inexactas en una demanda reivindicatoria (proceso agrario), ocultando la posesión y la verdadera dirección del inmueble (M. P. Camilo Montoya).